Que no, que en el reino de España ninguna confesión tiene carácter estatal, porque lo asegura el punto segundo del artículo 16 de la Constitución vigente. Por lo tanto, es falso, mendaz y mentiroso que el compañero Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia en el Gobierno presuntamente Socialista, se reuniera el 20 de enero con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de la villa, corte y catedral. Que no, que son infundios propalados por los enemigos del Gobierno, que los tiene, y muchos, y con razón.

Es imposible que en esa inexistente reunión hablaran sobre los trabajos de unas supuestas comisiones mixtas Iglesia-Estado, para coordinar las Jornadas de la Juventud convocadas por el dictador del llamado Estado Vaticano en Madrid los próximos días 20 y 21 de agosto. Nadie puede ser tan ingenuo como para creer que en la coordinación de esa tarea estén implicados siete ministerios nada menos del Gobierno que dice ser Socialista, más la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. Vaya, de la Comunidad y del Ayuntamiento se podría admitir, porque sus dirigentes son católicos, apostólicos y romanos, pero de ninguna manera se comprendería en los ministerios del Gobierno presentado como Socialista, y que está obligado a cumplir estrictamente la Constitución.

Habría que tener unas tragaderas impresionantes para aceptar que se está entrenando a seis mil efectivos de las fuerzas de seguridad del reino, para atender al millón y medio de jóvenes que se calcula vendrán a Madrid en esos días. Aunque si fuera cierto el rumor, serían pocos para defender a los jóvenes de la lujuria eclesial que se desataría, con la presencia del llamado papa, sus cardenales, arzobispos, obispos, abades, curas y frailes ansiosos de carne joven en la que saciar su lujuria.

El Gobierno apodado Socialista sería incapaz de malgastar los impuestos que nos cobra a los sufridos vasallos, para sufragar los gastos multimillonarios de esa concentración. Es que si tal hiciera nos echaríamos a la calle los vasallos que no pertenecemos a la secta catolicorromana, para gritar "¡No con nuestro dinero!", y crearíamos grupos de rechazo activo, para impedir la concentración pederástica en Madrid. Que se reúnan en el Vaticano, donde todas las depravaciones son naturales, empezando por la de tener como dictador a un antiguo militante de las Juventudes Hitlerianas, Joseph Ratzinger, ahora más conocido por su alias de

Benedicto XVI.

Por cierto que este mismo sujeto ha puesto a toda Italia en guardia, por si aludió o no al jefe de su Gobierno, el muy corrupto y corruptor Silvio Berlusconi, en una alocución a los policías romanos durante la audiencia que les concedió el día 21. El jefe de la secta pederástica mundial recomendó que la sociedad y sus dirigentes recuperen "sus raíces espirituales y morales, para dar más consistencia a los valores éticos y jurídicos de referencia, y por lo tanto a la acción práctica".

Sin duda Berlusconi es un golfo, pero el jefe de los pederastas carece de autoridad para hablar de moralidad y de valores éticos, cuando sus auxiliares abusan de los niños que se acercan a ellos por las cinco partes del mundo. Que empiece por moralizar a sus ayudantes, delincuentes que debieran estar en campos de concentración. El cinismo del dictador vaticano es tan grande como su desvergüenza, y eso lo sabemos todos, incluidos los ministros del desprestigiado Gobierno que se dice representante del partido antiguamente intachable llamado Socialista y Obrero.

En cambio sí es lógico que el partido autoproclamado Popular, salido de la llamada Democracia Cristiana, dos palabras incompatibles, defienda los intereses del vodevilesco Estado Vaticano. Lo que cuesta admitir es que los presuntos socialistas apoyen sus pretensiones. Pero el 19 de enero el Senado aprobó por unanimidad una propuesta de Alejandro Muñoz Alonso, del grupo conocido como Popular, por la que se insta al Gobierno de este reino sin religión estatal, a tomar medidas legales para proteger a las minorías cristianas perseguidas en países de mayoría musulmana. Asimismo se exige al Gobierno sedicentemente Socialista que obtenga el compromiso de esos países de que las iglesias cristianas "tendrán garantizados sus derechos y libertades fundamentales".

Esta escena esperpéntica del Ruedo Ibérico conculca la aconfesionalidad del reino, y obliga al Gobierno que presume de Socialista a injerirse en asuntos propios de otros estados soberanos. Además, la Iglesia romana está recibiendo la justa reciprocidad a su fanatismo criminal, ejercido durante diecinueve siglos con absoluta impunidad, cuando asesinaba en nombre del único Dios verdadero, que era el suyo, porque se decía su representante en la Tierra. La Iglesia romana ha ejercido el genocidio contra los judíos, los musulmanes, y los cristianos que no acataban sus tergiversaciones del Evangelio predicado por Jesucristo. Ahora sufre la justa compensación a su intransigencia totalitaria y criminal, por lo que carece de legitimidad para protestar por el trato recibido por sus súbditos allí donde sus antecesores cometieron toda clase de tropelías.

Ese mismo día 19 el portavoz del grupo presentado como Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, el mismo que niega los crímenes de la dictadura fascista en España, presentó una propuesta del mismo jaez en Bruselas. Reclamó a la Unión Europea "no sólo declaraciones de condena, sino también líneas de actuación contra la persecución de los cristianos en Oriente Medio".

Hemos de ver a este elemento del integrismo vasco ponerse al frente de la nueva cruzada contra los infieles, para liberar los llamados Santos Lugares de la ocupación mahometana. Igualito que en la Edad Media, porque estos sectarios retrógrados siguen defendiendo que su religión es la única verdadera, y fuera de su Iglesia no hay salvación. Otra vez se escuchará en nuestras tierras el grito medieval animador de las batallas: "¡Santiago y cierra España contra los moros!"

Pero los ajenos a la secta catolicorromana debemos resistirnos por todos los medios a esta ola invasora de fanatismo. Es urgente constituir un grupo de oposición a la radicalización de la vida nacional, aunque su majestad el rey nuestro señor, que Dios guarde, ostente el apodo de rey católico, como heredero de Isabel y Fernando, aquellos precursores de Hitler que expulsaron de España a moros y judíos.

Nuestra obligación de fieles vasallos consiste en cumplir la Constitución, pese a que no nos guste y no la hayamos votado. Y puesto que ninguna confesión tiene carácter estatal en el reino de España, nuestro deber es denunciar la decisión unánime de los senadores para proteger a los cristianos en países musulmanes, habida cuenta de que los cristianos se han dedicado durante siglos a matar moros como deporte civicorreligioso. Y sobre todo, hemos de oponernos a que se perpetre en Madrid esa celebración pederástica en agosto, que además pretende hacernos pagar el Gobierno injuriosamente apodado Socialista y hasta Obrero. ¡Con nuestro dinero no!